



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA  
Sala Segunda de Decisión Laboral

EDICTO

La Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia;

HACE SABER

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

PROCESO:	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE:	JHON JAIRO MARTÍNEZ BETANCUR
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA
PROCEDENCIA:	JUZGADO PROMISCOUO DEL CIRCUITO DE JERICÓ
RADICADO ÚNICO:	05-368-31-89-001-2022-00105-01
FECHA:	3 DE NOVIEMBRE DE 2023
DECISIÓN:	CONFIRMA SENTENCIA
MAGISTRADO PONENTE:	DR. HÉCTOR H. ÁLVAREZ RESTREPO

El presente edicto se fija en el micrositio de EDICTOS de la página web de la Rama Judicial del Poder Público de Colombia, por un (1) día hábil, hoy 30/11/2023, a las 08:00 horas, con fundamento en lo previsto en el art. 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

  
ÁNGELA PATRICIA SOSA VALENCIA  
Secretaria

El presente edicto se desfija hoy 30/11/2023, a las 17:00 horas

  
ÁNGELA PATRICIA SOSA VALENCIA  
Secretaria

Demandante: JHON JAIRO MARTÍNEZ BETANCUR

Demandados: MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA

#### SALA LABORAL

**Proceso:** ORDINARIO LABORAL

**Demandante:** JHON JAIRO MARTÍNEZ BETANCUR

**Demandados:** MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

**Procedencia:** JUZGADO PROMISCOUO DEL CIRCUITO DE JERICÓ - ANTIOQUIA

**Radicado:** 05-368-31-89-001-2022-00105-01

**Providencia:** 2023-0402

**Decisión:** CONFIRMA SENTENCIA

**Medellín, tres (03) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)**

Siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.) de la fecha, se constituyó la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior Antioquia con el objeto de proferir la sentencia que para hoy está señalada dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor **JHON JAIRO MARTINEZ BETANCUR** contra el **MUNICIPIO DE TARSO – ANTOQUIA**. Expediente recibido de la oficina de apoyo judicial el 24 de agosto de 2023. El Magistrado ponente, doctor **HÉCTOR H. ÁLVAREZ RESTREPO**, declaró abierto el acto.

Prevía deliberación de los Magistrados que integran la Sala y de conformidad con el acta de discusión de proyectos N° 0402 acordaron la siguiente providencia:

## **P R E T E N S I O N E S**

La parte actora pretende se declare la existencia de un contrato laboral a término fijo con el MUNICIPIO DE TARSO- ANTIOQUIA, desde el 2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2019. Como consecuencia, se ordene el pago de auxilio de transporte, prima por servicios, cesantías, intereses de las cesantías, vacaciones, sanción por no consignar las cesantías en un fondo de pensiones, indemnización por despido sin justa causa y se condene en costas procesales.

## **H E C H O S**

En apoyo de sus pretensiones expuso el demandante que se vinculó por medio de un contrato a término fijo desde el 2 de enero de 2012, al 31 de diciembre de 2019, con el municipio de Tarso – Antioquia.

Expuso que desempeñó las funciones de supernumerario de edificios públicos, mantenimiento de establecimientos educativos o culturales como el Centro educativo Rural, JESÚS ANIBAL GÓMEZ sede vereda Tacamocho, C.E.R JESÚS ANIBAL GÓMEZ Vereda la Linda, ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CASCABEL y el COLISEO GUILLERMO GAVIRIA CORREA.

Dijo que se suscribieron varios contratos a término fijo, de forma continua e ininterrumpida, devengando el salario mínimo legal, sin que la entidad territorial le cancelara el auxilio de transporte, primas por servicios, cesantías, intereses de las cesantías; por lo que presentó reclamación administrativa para que le fuera liquidado debidamente el contrato de trabajo, por desempeñarse como celador de los edificios públicos pertenecientes al municipio de Tarso, indicando la entidad que estos conceptos habían sido cancelados oportunamente.

## POSTURA DE LA PARTE DEMANDADA

Una vez efectuadas las diligencias de admisión, notificación y traslado del libelo demandatorio, el **MUNICIPIO DE TARSO** contestó manifestando que no es cierto lo citado por el demandante porque no existió un solo contrato continuo, existiendo periodos hasta de dos años sin que estuviera vinculado con la entidad.

Se opuso a las pretensiones e invocó como medios exceptivos los de ABUSO DEL DERECHO DE LITIGAR Y COBRO DE LO NO DEBIDO.

## DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante Sentencia proferida el 27 de julio de 2023, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Jericó – Antioquia, falló indicando lo siguiente:

**PRIMERO. NO ACCEDER** a las pretensiones de la demanda, incoadas por el demandante, señor JHON JAIRO MARTÍNEZ BETANCUR en contra del MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA, por cuanto no se acreditó que las labores de vigilancia o celaduría eran propias de los trabajadores oficiales, impidiendo a esta funcionaria pronunciamiento frente a la existencia de la relación laboral deprecada y los demás emolumentos laborales adendados.

**SEGUNDO. CONDENAR** en COSTAS PROCESALES a la parte demandante, Sr. JHON JAIRO MARTÍNEZ BETANCUR en favor del demandado, MUNICIPIO DE TARSO (ANT). Se fijan como agencias en derecho la suma de (2) SMLMV. Lo anterior, conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso y el Acuerdo No. PSA416-10554 de 2016.

**TERCERO. ORDENAR LA CONSULTA** de esta sentencia con la Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Antioquia, en caso de no ser recurrida la misma oportunamente, por ser totalmente adversa al trabajador.

**CUARTO.** Por su pronunciamiento oral, esta decisión queda notificada en estrados y frente a la misma proceden los recursos de ley.

La juez de primera instancia motivó la decisión sosteniendo que en los casos en los que se discute el reconocimiento de un vínculo laboral con el Estado, no es posible aplicar la misma regla que se utiliza para definir la autoridad judicial que conoce de las controversias suscitadas entre los trabajadores oficiales o empleados públicos.

Por lo tanto, las funciones de vigilancia o celaduría desplegadas por el demandante no corresponden a las de un trabajador oficial, correspondiendo este conocimiento a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

## RECURSO DE ALZADA

Inconforme con la decisión de despacho, el apoderado judicial de la parte demandante sostuvo literalmente lo siguiente:

“(…)

*Bueno, es claramente que entre el señor John Jairo Martínez Betancourt y el Municipio de Tarso existió una relación laboral, en principio desde el 2 de enero de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2012, este sería a término fijo.*

*Luego se configuró un cuarto contrato, desde el primero de abril de 2013, se configuró un contrato a término indefinido, hasta el 31 de diciembre de 2019. Nótese que no hubo cese de actividades durante el tiempo mencionado, luego días después el siempre continúa trabajando y luego lo llamaban para que firmara el nuevo contrato, el nuevo documento, sin mediar algún lapso entre contrato y otro.*

*Además, el contrato nuevo que firmaban, entre comillas, conservaba la misma esencia, pues a mí no me resulta claro la necesidad de terminar un contrato y volverlo a contratar inmediatamente con la misma actividad.*

*La suscripción de un nuevo contrato, independientemente del lapso que se medie entre uno y el otro, prevalece el mandato constitucional que trata el artículo 53, obviamente de la Constitución, es decir, la primacía de la realidad sobre la forma; los contratos sucesivos hacen presumir un solo contrato, un contrato único, aunque se haya manifestado sobre la terminación del mismo y se haya liquidado y sobre pagado las prestaciones, como lo relata la parte en la contestación de la demanda.*

*Lo cierto es que el señor John Jairo Martínez Betancourt, no dejó de prestar los servicios un solo día, lo cual, la relación laboral no se interrumpió, como lo dice la sentencia del Consejo Superior de la judicatura de julio de 1971 y ratificada por la sentencia del 5 de agosto de 1988 y la del 19 de enero de 1989.*

**Demandante: JHON JAIRO MARTÍNEZ BETANCUR**

**Demandados: MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA**

*Teniendo en cuenta lo que se manifestó en el fallo por la Honorable Juez, manifestó que no era un trabajador oficial, sino un empleado público, teniendo en cuenta las actividades que hacía el señor John Jairo Martínez.*

*En la contestación de la demanda, se ratificó y lo pronunció claramente el abogado de la entidad territorial, que varios contratos, entre ellos, aunque digamos, el primer contrato fue de portero en edificios públicos, también, digamos, entre el 2 de enero de 2003.*

*También hubo mantenimiento preventivo de escenarios culturales, esto es, él hacía, digamos, labores como de limpieza, organización de placas, jardinería, entonces miramos que también esto configura y hace parte de lo que hace un trabajador.*

*Ahora, lo mismo pasó entre el 1 de julio de 2013 al 31 de agosto de 2013, igualmente fue portero, pero seguidamente, entre el 15 de octubre del 2013, también fue operario en el mantenimiento menor de escenarios culturales. Igualmente, en el lapso, 1 de febrero de 2016 al 30 de junio de 2016, también en el contrato 8, que fue del 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre, también estuvo en el mantenimiento de establecimientos.*

*Igualmente, en el noveno, en el 10 y 12 en el 13 hasta el 31 de diciembre de 2019, tuvo varias actividades como ya se manifestó anteriormente.*

*Entonces, así las cosas, solicitó, señor Juez, se le reconozca a la parte demandada a pagar a cada una de las condenas referidas en la demanda.*

(...)"

## **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Una vez vencido el término de traslado las partes no presentaron alegaciones.

## **CONSIDERACIONES**

La competencia de esta corporación se concreta en los únicos puntos objeto de apelación.

El problema jurídico a resolver se centra en determinar si las funciones de celaduría y/o vigilancia, desempeñadas por el demandante en las diferentes Instituciones Educativas a cargo del municipio de Tarso, se encuentran entre las ejecutadas por

**Demandante: JHON JAIRO MARTÍNEZ BETANCUR**

**Demandados: MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA**

trabajadores oficiales, o por el contrario corresponden a las realizadas por un empleado público.

Quedó claro, como se expuso desde el libelo gestor que el señor JHON JAIRO MARTÍNEZ BETANCUR, laboró para el municipio de Tarso, desempeñando labores de celaduría y/o vigilancia, en las Instituciones Educativas a cargo de la entidad territorial, teniendo esta última la calidad de contratante.

Y es precisamente, la modalidad contractual, la que se discute en el caso sub-lite, advirtiendo que lo pretendido es la declaratoria de un contrato laboral, para concluir sobre la responsabilidad en el pago de las acreencias laborales a las que considera el demandante tener derecho y que no fueron pagas debidamente por la entidad territorial.

De entrada, se advierte que el municipio demandado es una entidad pública, por consiguiente, quienes laboran para este, según las funciones que desempeñan pueden ser clasificados como empleados públicos o trabajadores oficiales, categorización que se hace necesaria, no solo para efectos del pago de prestaciones, sino también, para radicar el conocimiento de este asunto a los jueces, bien sea de la jurisdicción contenciosa administrativa o la ordinaria laboral.

Para resolver el recurso de apelación, es pertinente indicar que el artículo 4° del Código Sustantivo del Trabajo, es claro que al señalar que, *“las relaciones de derecho individual de trabajo entre la administración pública (...) y demás servidores del Estado, no se rigen por este código sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten”*. Las normas especiales son básicamente la Ley 6ª de 1945, y su Decreto Reglamentario 2127 del mismo año.

La clasificación de los servidores Municipales consagrada en el Decreto 1333 de 1986, artículo 292, acogió el criterio orgánico, sobre el funcional y el de vinculación, para determinar la condición de empleado público o trabajador oficial. Por ello, en primer término, debe analizarse la naturaleza jurídica de la respectiva entidad para establecer

el status jurídico laboral. La norma en comento es del siguiente tenor: "ART. 292.- *Los servidores municipales son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales...*" (en igual sentido a nivel departamental). Esto en concordancia con lo previsto en el artículo 4 del Decreto 2127 de 1945 y el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968.

Frente al concepto de obra pública, contenido no sólo en el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986 y 42 de la Ley 11 del mismo año, la jurisprudencia del órgano de cierre laboral, ha adoptado una postura para definirla, no en función al tipo de bienes inmuebles públicos, sino atendiendo a su finalidad, esto es, que se trate de obras de utilidad pública, interés social o directamente relacionadas con la prestación de un servicio público, o la que es de interés general y se destina a un uso público. (ver sentencia del 25 de octubre de 2017, radicado N° 47295, magistrado ponente MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO).

En este orden, se advierte que la Corte Suprema de Justicia ha definido que las labores referentes a la construcción y sostenimiento de obras públicas no deben limitarse a los trabajos de pico y pala, puesto que también dentro de aquéllas encajan, en un sentido amplio, las actividades materiales e intelectuales que guardan estrecha relación con su ejecución y adecuado desarrollo, pues sin ellas, precisamente, no sería posible su construcción y mantenimiento. En la sentencia CSJ SL4440-2017, radicado 47292 M.P CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, se estableció lo siguiente:

*“Lo anterior deja en evidencia que no es cualquier labor la que da el título de trabajador oficial. La salvedad cubre un sector más exclusivo, vale decir, los servidores que intervienen propiamente en actividades de la construcción, esto es de fabricación, instalación, montaje, desmontaje o demolición de estructuras, infraestructuras (de transporte, energéticas, hidráulicas, telecomunicaciones, etc.) y edificaciones. Así mismo, el sostenimiento de dichas obras, es decir, el conjunto de actividades orientadas a la conservación, renovación y mejora del bien construido, lo cual implica intervenciones para su reparación de base, transformación estructural, garantía de prolongación de su vida útil y engrandecimiento.*

*Pero también ha puntualizado que labores de servicios generales y vigilancia, comunes a todas las entidades, desarrolladas por personal del nivel asistencial de los cuadros permanentes de la administración pública, tales como celaduría, jardinería, aseo general y limpieza, no tienen que ver con la construcción y sostenimiento de obras públicas, pues se trata de ocupaciones de simple colaboración y apoyo a la gestión institucional, y*

Demandante: JHON JAIRO MARTÍNEZ BETANCUR

Demandados: MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

*no de fabricación, transformación, intervención, reparación o mantenimiento de infraestructura y edificaciones”*

En sentencia del 05 de septiembre de 2017, radicado n.º 63993, Magistrado Ponente MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO, citó lo siguiente:

“(…)

*“Además de lo anterior, esta Corporación ha sido reiterativa al expresar que la labor de limpieza que se realiza sobre un bien de una entidad pública o afectado a un servicio público, no determina, por ese solo hecho, la naturaleza del vínculo laboral.*

*“Esto se dijo en sentencia de 27 de febrero de 2002, Rad. 17729:*

*“Al respecto cabe precisar que para ser establecida la calidad de trabajador oficial, ha sostenido la jurisprudencia, debe acreditarse en el juicio que las funciones desempeñadas en el caso específico, tienen relación con las actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas, pues no toda labor de servicios generales o de mantenimiento que se realice sobre un bien de una entidad pública o afectado a un servicio público como aseo de instalaciones, reparaciones, albañilería, pintura, etc., determina por ese solo hecho la naturaleza jurídica del vínculo laboral.*

(…)”

Así mismo, el alto tribunal en lo laboral en sentencia del 15 de julio de 2020, Radicado n.º 57592, magistrado ponente DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ, sostuvo textualmente:

*Así las cosas, se evidencian los yerros jurídicos del Tribunal al resolver la controversia bajo la égida del art. 53 de la CN, por ser incuestionable que las labores desarrolladas por el demandante de oficios varios en el cargo de auxiliar de servicios generales, nada tenían que ver ni guardaban relación con la construcción y sostenimiento de obra pública, y el hecho de que no se hubiera posesionado, para nada le concede tal prerrogativa. Como se dijo en párrafo precedente, las irregularidades que se puedan presentar en el trámite de un nombramiento y posesión de un empleado público, no conlleva la asunción de la calidad de trabajador oficial. En la providencia aludida, esta Corporación dejó en claro que:*

(I) Construcción y sostenimiento

*La decisión legislativa de sustraer del régimen estatutario a los servidores públicos ocupados en la construcción y sostenimiento de obras públicas (entendido este concepto en un sentido amplio o corriente), radica en las peculiaridades que implica todo trabajo en obra o de reparación, que, en muchos eventos, conlleva exposición a*

*condiciones climáticas difíciles (lluvia, granizo, sol intenso, etc.), a los riesgos inherentes a la actividad constructiva (derrumbes, inundaciones, caídas, etc.), la realización de horas extras, trabajo nocturno y festivo para dar cumplimiento a los plazos de obra, desplazamientos, trabajo físico agotador, entre otros factores, a los cuales no están sometidos usualmente los servidores de la administración pública.*

*En este orden, el propósito que subyace a esta salvedad legal, mira hacia un excepcional sector de trabajadores de la administración, dedicado a la construcción o reparación de obras, que, por razón de la naturaleza de las actividades que ejecutan, no es conveniente que sus condiciones laborales estén fría y rígidamente fijadas en la ley y los reglamentos adoptados unilateralmente por el Estado, sino que, por el contrario, exista cierta flexibilidad, reflejada en la posibilidad de que estos servidores negocien sus condiciones de empleo, a través del contrato de trabajo, convención o pacto colectivo. De esta forma, se le asigna a este sector el poder jurídico, inherente a la categoría a la que pertenecen, de dialogar y discutir con la administración empleadora, las necesidades, problemas y reclamos de índole laboral que les plantea las peculiaridades de su trabajo, y, sobre esa base, lograr acuerdos y soluciones instrumentalizadas a través del contrato, pacto o convención colectiva, o su sucedáneo, el laudo arbitral.*

*Lo anterior, deja en evidencia que no es cualquier labor la que da el título de trabajador oficial. La salvedad cobija un sector más exclusivo, vale decir, los servidores que intervienen propiamente en actividades de la construcción, esto es de fabricación, instalación, montaje, desmontaje o demolición de estructuras, infraestructuras (de transporte, energéticas, hidráulicas, telecomunicaciones, etc.) y edificaciones. Así mismo, el sostenimiento de dichas obras, es decir, el conjunto de actividades orientadas a la conservación, renovación y mejora del bien construido, lo cual implica intervenciones para su reparación de base, transformación estructural, garantía de prolongación de su vida útil y engrandecimiento.*

*La Corte ha sostenido que dichas labores no solo se limitan a los trabajos de «pico y pala», pues existen otras actividades, materiales e intelectuales, que tienen que ver directa e inmediatamente con su ejecución o adecuado desarrollo. Por ejemplo, en algunos casos, ha esgrimido que servidores que realizaron actividades de ingeniero de obras de infraestructura (CSJ SL 3676, 17 dic. 2010), técnico de pavimentos (CSJ SL 36706, 7 sep. 2010), ingeniero analista de pavimentos (CSJ SL 37106, 10 ago. 2010), cocinera de campamento de obras (CSJ SL15079-2014), conductor de transporte liviano de pavimentos (CSJ SL9767-2016), topógrafo (CSJ SL13996-2016), mantenimiento estructural de rellenos sanitarios (CSJ SL2603-2017), son trabajadores oficiales.*

*Pero también ha puntualizado que labores de servicios generales y vigilancia, comunes a todas las entidades, desarrolladas por personal del nivel asistencial de los cuadros permanentes de la administración pública, tales como celaduría, jardinería, aseo general y limpieza, no tienen que ver con la construcción y sostenimiento de obras públicas, pues se trata de ocupaciones de simple colaboración y apoyo a la gestión institucional, y no de fabricación, transformación, intervención, reparación o mantenimiento de infraestructuras o edificaciones (CSJ SL 33556, 24 jun. 2008; CSJ SL, 26 de Oct. 2010, rad. 38114; CSJ SL 42499, 29 ene. 2014, CSJ SL7340-2014, entre otras).*

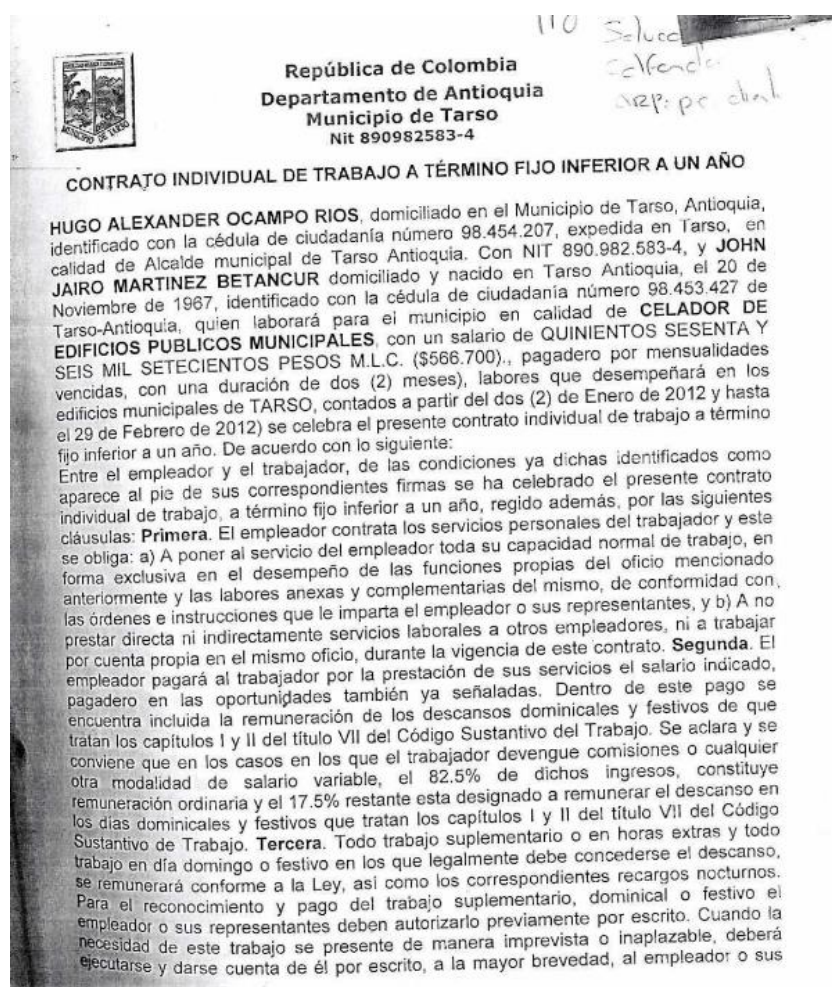
(...)"

Demandante: JHON JAIRO MARTÍNEZ BETANCUR

Demandados: MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

El anterior recuento se hace para recordar que cuando se trata de un empleado público, la relación laboral y subordinada con la entidad, no se circunscribe a un contrato de trabajo, sino a una relación legal y reglamentaria, sin importar que así lo hayan estipulado o no las partes, la cual esta jurisdicción no es la competente para declararla, sino la contenciosa administrativa, contrario a lo que sucede cuando se está ante un trabajador oficial dependiente y subordinado al ente público, pues en este caso, esta jurisdicción efectivamente es la competente para declarar que dicha relación se dio bajo un contrato laboral.

En el presente asunto, se observa en la prueba documental, que el demandante fue vinculado por medio de un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, porque así lo indicó el municipio demandado con base en lo siguiente:



**Demandante: JHON JAIRO MARTÍNEZ BETANCUR**

**Demandados: MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA**

Por lo tanto y como se explicó en la jurisprudencia descrita que data desde el año 2017, el órgano de cierre laboral, emitió pronunciamientos sobre el alcance de los trabajadores oficiales, señalando taxativamente que quienes cumplen funciones de “*vigilancia*”, no desempeñan labores de mantenimiento o sostenimiento de una obra pública, situación que indudablemente, direcciona esta corporación a la Absolución de la enjuiciada tal y como lo concluyó la A quo, por no ostentar el demandante la calidad de trabajador oficial.

En cuanto a los demás puntos de apelación instaurados por el polo activo, no resulta ser necesario para esta Corporación, pronunciarse sobre cada uno de ellos, toda vez que, con lo advertido se está despachando desfavorablemente la vinculación y los aspectos que la rodean, siendo precisamente estos, los que refiere el quejoso en esta instancia judicial.

Por lo tanto, se **confirmará íntegramente** la sentencia proferida por la A quo, en primera instancia.

Sin **costas** en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

### **F A L L A :**

**SE CONFIRMA** la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Jericó – Antioquia, el 27 de julio de 2023, dentro del proceso ordinario laboral, promovido por el señor **JHON JAIRO MARTÍNEZ BETANCUR** en contra del

Demandante: JHON JAIRO MARTÍNEZ BETANCUR

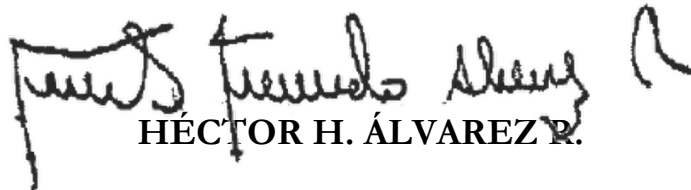
Demandados: MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA

**MUNICIPIO DE TARSO – ANTIOQUIA**, conforme a lo expuesto en este proveído.

Sin costas en esta instancia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. Se ordena devolver el expediente digital al Juzgado de origen. Se termina la audiencia y en constancia se firma,

Los Magistrados,



HÉCTOR H. ÁLVAREZ R.



WILLIAM ENRIQUE SANTA MARÍN



NANCY EDITH BERNAL MILLÁN